

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



RESOLUCIÓN No.

08 55

DE 2018

17 JUL 2018

*"Por la cual se impone una sanción a la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S**, dentro del expediente administrativo A-1909"*

**LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 1 y 5 literal b) de la Ley 182 de 1995, en los artículos 6 literal j), 11, 21 y 22 de la Ley 1507 de 2012, el Acuerdo 010 de 2006, Resolución No. 0026 de 2018, el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, demás normas concordantes, y

**CONSIDERANDO**

**1. HECHOS**

Que el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, otorga a la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-, las facultades que en materia de vigilancia, seguimiento y control del servicio público de televisión, anteriormente eran ejercidas por la Comisión Nacional de Televisión, en adelante CNTV, por mandato del literal b) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995.

El literal mencionado establece que era función de la CNTV, siendo ahora función de la ANTV:

*"Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y*

*contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar".*

Que la Autoridad Nacional de Televisión suscribió el Contrato de Concesión No. 080 del cuatro (04) de diciembre de 2012, con la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, para la operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción, con cobertura a nivel Nacional.

Que en ejercicio de las facultades otorgadas a la ANTV en materia de Inspección, Vigilancia, Seguimiento y Control frente al servicio público de televisión, fue programada la realización de una visita administrativa al operador del servicio de televisión por suscripción **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, la cual se realizó por parte de funcionarios de la ANTV el diecinueve (19) de agosto de 2015 en el municipio de Valledupar, departamento de Cesar, cuyos hallazgos reposan en el Acta de visita No. 15106 del diecinueve (19) de agosto de 2015 y en el Informe de visita No. 15106 de agosto de 2015, en el acápite de hallazgos, observaciones y recomendaciones se expresa lo siguiente:

"(...)

### **3. Hallazgos**

*Se describen a continuación los hallazgos evidenciados en la visita realizada:*

- 3.1 Confirmó el operador que no cuenta con canal de producción propia. Revisadas las parrillas suministradas por el operador, se encontró que no transmiten en ninguno de los municipios en donde tienen autorizada la prestación del servicio, 10 canales temáticos satelitales. Cabe mencionar que el operador suministró parrillas de municipios donde informó que no está prestando servicio.*
- 3.2 Para la revisión de información de los aspectos financieros, administrativos y de bases de datos, se solicita inicialmente al concesionario suministrar información de las bases de datos de suscriptores y permitir el acceso a esta información en el sistema del operador. Al revisar la información suministrada, se encuentra que no cuentan con información de suscriptores de los municipios de El Molino, Guamal y la de Santa Marta es del año 2014; así mismo se encuentra que no cuentan con información de facturación de los municipios de Guamal, Santa Marta y Astrea. De esta forma, solamente se obtiene información parcial de las bases de datos de suscriptores y de facturación.*
- 3.3 Informó el operador que en los municipios de Guamal y Santa Marta, municipios incluidos en el contrato de concesión 080 de 2012 como a cargo del concesionario para prestar el servicio de televisión por suscripción, a la fecha de la visita (19 de agosto) no se encuentra prestando el servicio.*

- 3.4 Con base en la información suministrada por el operador se confirmó que la información suministrada en autoliquidaciones entregadas a la ANTV, en donde reportan contar con suscriptores en los municipios de Guamal y Santa Marta, no corresponde a la realidad.
- 3.5 Revisadas las colillas de facturación que fueron suministradas, correspondientes al mes de julio de 2015, se encuentra que no se emitió factura para los suscriptores del municipio de Astrea en dicho período, sin explicación alguna de parte del operador para este hecho.
- 3.6 Con base en la información obtenida de número de facturas y de suscriptores autoliquidados en el período julio de 2015, se observa que el operador reporta a la ANTV más suscriptores que los que fueron facturados, con excepción del municipio de El Molino donde reportó el mismo número de suscriptores facturados.
- 3.7 En el formato de factura suministrado por el concesionario, se observa que en las facturas que emite, no se incluyen direcciones y horarios de oficinas para la atención de PQRs.
- 3.8 El operador no suministró copia de contratos de suscripción, advirtiendo que dichas copias reposan en sus oficinas en cada municipio, que desconoce cómo es su archivo y que de esta forma no puede hacer entrega al funcionario de copia de ningún contrato de suscripción.
- 3.9 Se evidenció en el momento de la visita que el operador no tenía montada en su página web ([www.digimedios.tv](http://www.digimedios.tv)), copia del modelo de contrato de suscripción.

#### **4. Observaciones y recomendaciones**

A partir de los aspectos revisados y los hallazgos evidenciados en la visita realizada al operador DIGIMEDIOS, se presentan a continuación las observaciones y recomendaciones pertinentes:

- 4.1 De acuerdo con los hallazgos descritos en la sección anterior, se pone a disposición de la Coordinación de Vigilancia, Control y Seguimiento, el presente informe, el acta de visita 15106 y todos sus anexos, para que se adelanten las actuaciones administrativas a que haya lugar.
- 4.2 A partir de la observación del numeral 4.1., se recomienda a la Coordinación de Vigilancia, Control y Seguimiento, que se adelanten las actuaciones administrativas que considere pertinentes y adjuntar el presente informe junto con todos sus anexos al expediente que se dé apertura.

(...)"

Que con fundamento en lo anterior mediante la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de 2017, la Autoridad Nacional de Televisión ordenó adelantar procedimiento administrativo sancionatorio y formuló a la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S.**, identificada con el NIT 900.552.508-2 los siguientes cargos:

"(...)

**5. CARGOS FORMULADOS:****PRIMER CARGO**

*De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo 010 de 2006 en concordancia con lo contemplado en el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, y el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, los concesionarios del servicio de televisión por suscripción están obligados a atender los requerimientos de información que le formulara la ANTV en ejercicio de su función de inspección, vigilancia y control, atribución que esta Autoridad estaba cumpliendo precisamente con el desarrollo de la Visita realizada el día 19 de agosto de 2015; sin embargo, de acuerdo con los hallazgos referidos en el Informe No. 15106 de agosto de 2015, el concesionario **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** presuntamente no habría atendido la totalidad de los requerimientos de información que le fueron formulados en el marco de la Visita realizada el 19 de agosto de 2015, tal situación se deriva de las siguientes evidencias:*

*"(...)*

*3.8 El operador no suministró copia de contratos de suscripción, advirtiendo que dichas copias reposan en sus oficinas en cada municipio, que desconoce cómo es su archivo y que de esta forma no puede hacer entrega al funcionario de copia de ningún contrato de suscripción.*

*(...)”*

*La anterior conducta constituye una presunta falta al tenor de lo señalado en el artículo 39 del Acuerdo 010 de 2006 en concordancia con el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, sancionable en los términos del literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995 y el literal j) del artículo 6° de la Ley 1507 de 2012.*

**SEGUNDO CARGO**

*De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo 010 de 2006 los concesionarios de televisión por suscripción, deberán emitir un canal de producción nacional con un mínimo de cinco (5) horas diarias de emisión, así mismo en concordancia con lo anterior el artículo 4 del Acuerdo 001 de 2009 de la CNTV "Por medio del cual se incentiva la producción nacional de televisión en canales satelitales temáticos de origen colombiano para su teledifusión a través de los sistemas de televisión cerrada del país", concede la excepción que si en la parrilla de programación del operador de televisión por suscripción cuenta con diez (10) canales codificados temáticos satelitales de origen nacional, quedarán exonerados de la obligación de emitir el canal de producción nacional; sin embargo, de acuerdo con los hallazgos referidos en el Acta de visita No. 15106 del diecinueve (19) de agosto de 2015 y en el Informe de visita No. 15106 de agosto de 2015, el concesionario **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con el NIT 900.552.508, presuntamente en el municipio de Valledupar – Cesar no cuenta con un canal de producción nacional, ni diez (10) canales codificados temáticos satelitales de origen nacional; tal situación se deriva de la siguiente evidencia:*



*"(...) 3.1 Confirmó el operador que no cuenta con canal de producción propia. Revisadas las parrillas suministradas por el operador, se encontró que no transmiten en ninguno de los municipios en donde tienen autorizada la prestación del servicio, 10 canales temáticos satelitales. Cabe mencionar que el operador suministró parrillas de municipios donde informó que no está prestando servicio. (...)"*

*La anterior conducta podría constituir una presunta infracción a lo establecido en los artículos 12 del acuerdo 10 de 2006, sancionable en los términos del literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995 y el literal j) del artículo 6° de la Ley 1507 de 2012.*

*(...)"*

Que mediante radicado No. S2017800028087 del veintisiete (27) de noviembre de 2017 se envió citatorio para acudir a la diligencia de notificación personal, el cual fue enviado y entregado al correo electrónico [claudiamile05@hotmail.com](mailto:claudiamile05@hotmail.com) el veintiocho (28) de noviembre de 2017 a las (16:06 GMT – 05:00), según consta en el certificado de comunicación electrónica E6013994-S con acuse de entrega a las (16:07 GMT- 5:00 PM).

Que se envió comunicación mediante radicado No. 2017800028090 del veintisiete (27) de noviembre de 2017 a la empresa SEGUROS DEL ESTADO S.A., aseguradora de la sociedad investigada, a efectos de comunicar el contenido de la Resolución 1970 del veintiuno (21) de noviembre 2017, la cual fue entregada el veintisiete (27) de noviembre de 2017, según consta en el acuse de recibo que reposa en la carpeta del expediente A-1909.

Que transcurrido el término de cinco (5) días sin que se surtiera la notificación personal, se procedió a notificar mediante aviso la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre 2017 con el radicado de salida No. S2017800029656 del once (11) de diciembre de 2017, que según el reporte de certimail identificado con No. E6167207-S fue enviado y entregado el once (11) de diciembre de 2017 a las (15:10 GMT- 5:00 PM).

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, la comunidad organizada investigada contaba con un término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, para presentar descargos, solicitar y aportar pruebas, controvertir y/o contradecir las que obran en el expediente.

Que la sociedad objeto de investigación, haciendo uso de su derecho de defensa y contradicción presentó escrito de descargos identificado con radicado No. E2018900000347 del cuatro (04) de enero de 2018 contra la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre 2017.

Que teniendo en cuenta que ésta autoridad consideró que no se requería de la práctica de pruebas adicionales, por cuanto que con las obrantes en el expediente eran suficiente para continuar con el procedimiento sancionatorio, en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la ANTV expidió la Resolución No. 0172 del trece (13) de febrero del 2018, por medio de la cual corrió traslado a la

sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S**, para que presentara alegatos de conclusión dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del citado acto administrativo.

Que mediante radicado No. S2018800004853 del dieciséis (16) de febrero de 2018 se envió citatorio para acudir a la diligencia de notificación personal, el cual fue enviado y entregado al correo electrónico [claudiamile05@hotmail.com](mailto:claudiamile05@hotmail.com) el dieciséis (16) de febrero de 2018, según consta en el certificado de comunicación electrónica E6854945-S a las (11:10 GMT- 5:00)

Que transcurrido el término de cinco (5) días sin que se surtiera la notificación personal, se procedió a notificar mediante aviso la Resolución No. 0172 del trece (13) de febrero 2018 con el radicado de salida No. S2018800005759 del veintisiete (27) de febrero de 2018, que según el reporte de certimail identificado con No. E6976857-S de la empresa 472 fue enviado y entregado el veintisiete (27) de febrero de 2018 a las 13:37 GMT- 5:00).

Que de conformidad con lo establecido en el artículo primero de la Resolución No. 0172 del trece (13) de febrero de 2018, la sociedad investigada contaba con un término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión dentro de la investigación adelantada a través del expediente administrativo A-1909, dicho lo anterior, aprecia esta autoridad que la sociedad investigada no presento alegatos de conclusión.

Que mediante memorando interno No. I2018500001809 del treinta (30) de mayo de 2018, la Coordinación de Vigilancia, Control y Seguimiento le solicitó a la Coordinación Administrativa y Financiera de esta Autoridad el valor actualizado del contrato de concesión No. 080 del cuatro (04) de diciembre de 2012.

Que mediante memorando interno No. I2018900001973 del catorce (14) de junio de 2018 la Coordinación Administrativa y Financiera 2018 dio respuesta de la solicitud realizada en la cual informo lo siguiente:

"(...)

CONCESIONARIO	COMPONENTE FIJO	COMPONENTE VARIABLE	TOTAL CONCESIÓN A FEB 28 DE 2018
DIGIMEDIOS TELEVISION SAS	\$ 54.283.216	\$ 50.653.529	\$ 104.936.745

*Es importante informar:*

1. Para el cálculo del valor actualizado se tomó el IPC del mes de mayo de 2018
2. la fecha de corte de reporte de suscriptores según sus autoliquidaciones es mayo de 2018

(...)"

Que una vez consultado el certificado de existencia y representación legal, en el Registro Único Empresarial y Social -RUES-, con fecha del veintiocho (28) de mayo de 2018, en el link ([http://www.rues.org.co/RUES WEBI](http://www.rues.org.co/RUES_WEBI)), correspondiente a la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S**, se evidenció la siguiente anotación:

"(...)

***CERTIFICA -VIGENCIA***

*QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2062*

(...)"

**2. PERSONA JURÍDICA OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN**

La sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, operador del servicio de televisión por suscripción de acuerdo con el contrato No. 080 de 2012, es sujeto de las obligaciones constitucionales, legales, reglamentarias y regulatorias previstas para la prestación de dicho servicio.

**3. COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL TELEVISIÓN**

El artículo 11 de la Ley 1507 de 2012 instituye de manera expresa la transferencia a la ANTV de las funciones de control y vigilancia antes asignadas por la Ley 182 de 1995 a la extinta CNTV, entre ellas las previstas en el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, que establece:

"(...)

*b) Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar.*

(...)"

Al tiempo que el literal j) del artículo 6 de la Ley 1507 de 2012, dispone que es función de la Junta Nacional de Televisión:

"(...)

j) Sancionar de conformidad con las normas del debido proceso y con el procedimiento previsto en la ley, a los operadores del servicio, a los concesionarios de espacios de televisión y a los contratistas de los canales regionales por violación de sus obligaciones contractuales, o por transgresión de las disposiciones legales y reglamentarias o de las de la ANTV, relacionadas con el servicio.

(...)"

En este orden de ideas es claro que la ANTV es competente para adelantar las investigaciones que se deriven de las funciones que le asigna la ley en materia de Vigilancia, Inspección, Control y Seguimiento del servicio público de televisión, así como para imponer las sanciones a que haya lugar.

Teniendo en cuenta que no existe norma especial que regule el procedimiento a seguir por parte de la ANTV para efectos de ejercer las facultades de inspección, control y vigilancia, y por ende el poder sancionatorio, debe darse aplicación al procedimiento general señalado para tal efecto en el Capítulo III del Título III de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

#### 4. PRUEBAS

La Autoridad Nacional de Televisión - ANTV para decidir de fondo la actuación administrativa adelantada dentro del expediente A-1909, valoró y consideró todas las pruebas que obran en el expediente, en especial las que se mencionan a continuación:

- a) Copia del contrato de concesión No. 080 del cuatro (4) de diciembre de 2012.
- b) Acta de Visita No. 15106 del diecinueve (19) de agosto de 2015 realizada al operador **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S**, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar.
- c) Informe de análisis de visita No. 15106 de agosto de 2015 de conformidad con lo consignado en el Acta de Visita No. 15106 del diecinueve (19) de agosto de 2015.

#### 5. CARGOS FORMULADOS.

Mediante la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de 2017, la Autoridad Nacional de Televisión formuló en contra de la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, los siguientes cargos:

"(...)

##### **PRIMER CARGO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo 010 de 2006 en concordancia con lo contemplado en el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, y el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, los concesionarios del servicio de televisión por suscripción están obligados a atender los requerimientos de información que le formulara la ANTV en ejercicio de su función de inspección, vigilancia y control, atribución que esta Autoridad estaba cumpliendo precisamente con el desarrollo de la Visita realizada el día 19 de agosto de 2015; sin embargo, de acuerdo con los hallazgos referidos en el Informe No. 15106 de agosto de 2015, el concesionario **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** presuntamente no habría atendido la totalidad de los requerimientos de información que le fueron formulados en el marco de la Visita realizada el 19 de agosto de 2015, tal situación se deriva de las siguientes evidencias:

"(...)

3.8 El operador no suministró copia de contratos de suscripción, advirtiendo que dichas copias reposan en sus oficinas en cada municipio, que desconoce cómo es su archivo y que de esta forma no puede hacer entrega al funcionario de copia de ningún contrato de suscripción.

(...)"

La anterior conducta constituye una presunta falta al tenor de lo señalado en el artículo 39 del Acuerdo 010 de 2006 en concordancia con el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, sancionable en los términos del literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995 y el literal j) del artículo 6° de la Ley 1507 de 2012.

## **SEGUNDO CARGO**

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo 010 de 2006 los concesionarios de televisión por suscripción, deberán emitir un canal de producción nacional con un mínimo de cinco (5) horas diarias de emisión, así mismo en concordancia con lo anterior el artículo 4 del Acuerdo 001 de 2009 de la CNTV "Por medio del cual se incentiva la producción nacional de televisión en canales satelitales temáticos de origen colombiano para su teledifusión a través de los sistemas de televisión cerrada del país", concede la excepción que si en la parrilla de programación del operador de televisión por suscripción cuenta con diez (10) canales codificados temáticos satelitales de origen nacional, quedarán exonerados de la obligación de emitir el canal de producción nacional; sin embargo, de acuerdo con los hallazgos referidos en el Acta de visita No. 15106 del diecinueve (19) de agosto de 2015 y en el Informe de visita No. 15106 de agosto de 2015, el concesionario **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con el NIT 900.552.508, presuntamente en el municipio de Valledupar – Cesar no cuenta con un canal de producción nacional, ni diez (10) canales codificados temáticos satelitales de origen nacional; tal situación se deriva de la siguiente evidencia:

"(...) 3.1 Confirmó el operador que no cuenta con canal de producción propia. Revisadas las parrillas suministradas por el operador, se encontró que no transmiten en ninguno de los municipios en donde tienen autorizada la prestación del servicio, 10 canales temáticos satelitales. Cabe mencionar que el operador suministró parrillas de municipios donde informó que no está prestando servicio. (...)"

*La anterior conducta podría constituir una presunta infracción a lo establecido en los artículos 12 del acuerdo 10 de 2006, sancionable en los términos del literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995 y el literal j) del artículo 6° de la Ley 1507 de 2012.*

*(...)”.*

## **6. NORMAS INFRINGIDAS.**

Con las conductas arriba descritas, la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, presuntamente transgrediría las siguientes normas:

### **Artículo 11 de la Ley 1507 de 2012**

*"(...)*

*ARTÍCULO 11. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN MATERIA DE CONTROL Y VIGILANCIA. La Asignada a la Autoridad Nacional de Televisión ANTV ejercerá las funciones que el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995 asignaba a la Comisión Nacional de Televisión, sin perjuicio de las actividades relacionadas con la dirección y manejo de la actividad concesional que en calidad de entidad concedente debe realizar la ANTV., de conformidad con el 14 de la presente ley, y de aquellas relacionadas con el control y vigilancia del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de televisión de acuerdo con el artículo 15 de la presente ley.*

*PARÁGRAFO. Corresponde a la ANTV ejercer el control y vigilancia por el cumplimiento de normas relacionadas con los contenidos de televisión.*

### **Ley 182 de 1995, literal b) artículo 5**

*"(...)*

*b) Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigación; exigirles y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y características de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar.*

*(...)”.*

### **Acuerdo No. 010 de 2006**

*"(...)*

*ARTÍCULO 12. PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL.*

*Con el objeto de fomentar la industria de televisión colombiana, el concesionario deberá emitir como mínimo un canal con cinco (5) horas diarias de producción nacional.*

*Parágrafo 1. La Comisión Nacional de Televisión previo análisis y evaluación del desarrollo de la industria de la televisión por suscripción, podrá aumentar de manera gradual la exigencia de producción nacional.*

*Parágrafo 2. Los operadores del servicio de televisión por suscripción deberán conservar al menos por seis (6) meses, las grabaciones de los programas de producción propia que emitan.*

*(...)*

*ARTÍCULO 39. VIGILANCIA Y CONTROL. De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, la Comisión Nacional de Televisión efectuará visitas de inspección a cada una de los prestatarios del servicio de televisión por suscripción y verificará el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.*

*PARÁGRAFO. En todo caso, la Comisión Nacional de Televisión podrá contratar con entidades públicas nacionales o internacionales, las actividades que considere necesarias para el ejercicio efectivo de sus funciones de control y vigilancia.*

*(...)”.*

## **7. CONSIDERACIONES DE LA ANTV**

Procede la ANTV en el presente acápite a desarrollar de manera detallada los hechos generadores de la conducta investigada, a la luz del acervo probatorio que obra en el expediente objeto de análisis y de lo señalado en el escrito de descargos presentado con radicado de entrada No. 2018900000347 del cuatro (04) de enero de 2018 frente a la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de 2017 toda vez que la sociedad investigada no presento escrito de alegatos de conclusión frente a la Resolución No.0172 del trece (13) de febrero de 2018.

Previo a resolver en derecho lo procedente dentro de la presente actuación administrativa, está Autoridad estima pertinente señalar que mediante la Resolución No. 0026 del doce (12) de enero de 2018, expedida por la Autoridad Nacional de televisión, se derogó el Acuerdo CNTV No. 010 del veinticuatro (24) de noviembre de 2006, norma que contenía las disposiciones por cuyas presuntas infracciones se formularon los cargos en el numeral quinto contenido en la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de 2017.

En ese sentido, merece la pena mencionar que la Dirección de la ANTV solicitó un concepto jurídico al abogado externo doctor OSCAR IBÁÑEZ IBARRA sobre "*Aplicación principio de favorabilidad en procesos sancionatorios*" en el cual se expresa lo siguiente:

*"(...)*



*La Autoridad Nacional de Televisión recientemente expidió la Resolución 650 de 2018 "Por la cual se Reglamenta el Servicio de Televisión Comunitaria". Acto administrativo que expresamente derogó la Resolución 433 de 2013 "Por la cual se Reglamenta Parcialmente el Servicio de Televisión Comunitaria Cerrada sin Ánimo de Lucro".*

*Teniendo en cuenta lo anterior, de manera atenta se solicita su concepto para indicar cómo operaría el principio de favorabilidad y de legalidad, en los siguientes eventos:*

*1. Hechos de incumplimiento ocurridos y probados (visita realizada) en vigencia de la Resolución 433 de 2013, frente a los cuales a la fecha no se ha emitido acto administrativo de apertura y formulación de cargos.*

*2. Investigaciones en las cuales ya se notificó el acto administrativo de apertura y formulación de cargos con conductas tipificadas en la Resolución 433 de 2013, sin que a la fecha se haya emitido decisión de fondo; en donde:*

*2.1. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 desaparece o se modifica sustancialmente en la Resolución 650 de 2018.*

*2.2. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 se replica en idénticos términos en la Resolución 650 de 2018, pero con consecuencias sancionatorias más gravosas en la Resolución 650 de 2018.*

*2.3. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 se replica en idénticos términos en la Resolución 650 de 2018, pero con consecuencias sancionatorias menos gravosas en la Resolución 650 de 2018.*

*2.4. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 se replica en idénticos términos en la Resolución 650 de 2018, con consecuencias sancionatorias idénticas.*

*3. Investigaciones en donde ya se notificó el acto administrativo de apertura y formulación de cargos con conductas tipificadas en la Resolución 433 de 2013, con un acto administrativo sancionatorio emitido en primera instancia y que se encuentran en trámite de recurso; en donde:*

*3.1. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 desaparece o se modifica sustancialmente en la Resolución 650 de 2018.*

*3.2. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 se replica en idénticos términos en la Resolución 650 de 2018, pero con consecuencias sancionatorias más gravosas en la Resolución 650 de 2018.*

*3.3. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 se replica en idénticos términos en la Resolución 650 de 2018, pero con consecuencias sancionatorias menos gravosas en la Resolución 650 de 2018.*

3.4. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 se replica en idénticos términos en la Resolución 650 de 2018, con consecuencias sancionatorias idénticas.

*Adicional a lo anterior, y en el caso que se considere que al desaparecer la conducta típica en consecuencia no habría lugar a continuar con la investigación, se solicita indicar qué actuación administrativa posterior debe surtir para dar fin a la investigación.*

*I. Elementos formales y materiales del ejercicio de la potestad sancionatoria.*

*2. Al tenor de su consulta, y dado que la misma se enmarca en el escenario del ejercicio de la potestad sancionatoria de la ANTV, sea lo primero resaltar la postura de la Sección Primera del Consejo de Estado, en lo que atañe a los rasgos formales y materiales que deben concurrir para que se pueda verificar legítimamente la existencia de una sanción administrativa. En su oportunidad ha sostenido la Sección:*

*"Para la Sala es perceptible que en general el ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa, en tanto que manifestación del ius puniendi del Estado confiado a autoridades administrativas, presenta unos rasgos formales y materiales que deben concurrir en un caso concreto para que se pueda verificar legítimamente la existencia de una sanción administrativa. En efecto, **desde una perspectiva formal**, en virtud del principio de legalidad imperante en este ámbito, resulta indispensable que exista una norma con rango legal que tipifique una determinada conducta como infracción administrativa y establezca de manera paralela la correspondiente sanción, explícitamente calificada de tal. En últimas, conforme ha sido señalado por esta Corporación, "el principio de legalidad de las sanciones exige: (i) que el señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el legislador, **a quien le corresponde crear, modificar o suprimir los tipos penales y establecer, modificar o suprimir sanciones;** (ii) **que este señalamiento sea previo al momento de la comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la sanción, salvo en el caso de que la Ley no vigente al momento de ocurrir el hecho sancionado sea más favorable de aquélla regente al momento de la infracción sancionada;** (iii) que la sanción se determine no sólo previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no determinable". De otra parte, desde una perspectiva material, es preciso que la consecuencia jurídica expresamente calificada por la norma legal como sanción administrativa entrañe un mal coactivamente impuesto por la Administración al particular, e implique, por ende, la privación, el recorte o la afectación de un derecho, interés o situación jurídica del infractor como respuesta a la realización de un comportamiento previamente tipificado como infracción o falta administrativa. La sanción administrativa tendrá entonces, por definición, un sentido punitivo, retributivo de la transgresión cometida, por lo cual le será inherente un "carácter aflictivo" y será siempre la "respuesta represiva del Estado al incumplimiento de las obligaciones, deberes y mandatos generales por parte de sus destinatarios." (Negrilla fuera de texto) 1*

*3. A la luz del precedente previamente citado, desde el punto de vista formal, tenemos que es a la ANTV a quién la ley ha facultado, como autoridad regulatoria, para crear o suprimir los tipos administrativos sancionatorios, así como para establecer, modificar o suprimir tales sanciones. Así mismo, que la conducta descrita en la norma y su correspondiente sanción sean*

previas a la comisión del ilícito administrativo " salvo en el caso de que la Ley no vigente al momento **de ocurrir el hecho sancionado sea más favorable** de aquélla regente al momento de la infracción sancionada." 2

4. Sobre la aplicación del principio de favorabilidad, tal y como ya lo habíamos dicho a la ANTV en concepto previo, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación, manifestó que este debería "( ) **operar no solo en las actuaciones judiciales sino en toda clase de actuaciones administrativas**". En dicha sentencia, la precitada Corporación aseveró:

"Estas mismas consideraciones que hizo la Corte [Sentencia C-922 de 2001] tratándose del régimen sancionatorio aplicable a infracciones cambiarias en las materias de competencia de la DIAN deben también ser aplicadas en los asuntos sancionatorios cambiarios de competencia de la Superintendencia de Sociedades, pues no existe razón alguna que justifique ese trato diferente. Lo contrario, claramente constituiría un agravio al principio constitucional de igualdad ante la ley. En el anterior contexto, en esta providencia la Sección Primera unifica su criterio en el sentido de señalar que el principio de favorabilidad es aplicable en las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar **las infracciones al régimen cambiario, por tratarse de una garantía mínima del debido proceso, el cual es un derecho constitucional fundamental que debe operar no solo en las actuaciones judiciales sino en toda clase de actuaciones administrativas.**

( )

**Cuando se impuso la sanción a la demandante la conducta por la cual fue sancionada, esto es, el registro extemporáneo de la operación de inversión extranjera mediante la presentación del Formulario No. 11, no constituía infracción cambiaria, aunque sí lo era cuando se presentó dicha circunstancia, esto es, para el mes de octubre de 2008. En el anterior contexto, encuentra la Sala que la Superintendencia de Sociedades desconoció lo dispuesto en el artículo 29 de la C.P. al no aplicar el principio de favorabilidad en la actuación administrativa sancionatoria que adelantó contra la sociedad GRUPO MCM S.A. DE C.V., puesto que para la fecha en que le impuso la sanción de multa demandada el registro extemporáneo de la operación de inversión extranjera que realizó no constituía una infracción cambiaria a la luz de lo reglado en el Decreto 4800 de 2010, norma que modificó el Decreto 2080 de 2000 y que le debió aplicar por serle más favorable.**"(Negrilla fuera de texto)

5. Ahora bien, cómo acto administrativo, la decisión que contiene una decisión de índole sancionatorio debe contener los elementos de validez propios de todo acto definitivo que ponga fin a una actuación administrativa de carácter coercitivo para que aquél conserve su validez. En tal sentido, la doctrina de la Sección Tercera del Consejo de Estado nos enseña que:

"Por acto administrativo de contenido individual se entiende toda manifestación unilateral, por regla general de voluntad, de quienes ejercen funciones administrativas, tendiente a la producción de efectos jurídicos.

*De esta manera se dice que son 5 los elementos claves para llegar a la conclusión de que existe un acto administrativo: (i) la expresión o manifestación concreta de la administración; (ii) la expresión unilateral del querer de la administración; (iii) el ejercicio de la función administrativa mediante la declaración de la voluntad de la administración; (iv) que su contenido material equivalga al ejercicio de una función administrativa así provenga de cualquiera de los órganos del poder público o de particulares. (v) que posea la fuerza suficiente para decidir y crear situaciones jurídicas a partir de su contenido, de manera que esta se configura como la característica reveladora o de mayor importancia.*

( )

*Ahora bien, para que el acto administrativo sea válido deben concurrir una serie de elementos acordes al ordenamiento jurídico entre tanto que cualquier falla en su estructura podría afectar la legalidad del acto. En el primer plano podemos mencionar los elementos esenciales del acto, dentro de los cuales se encuentran los elementos externos, estos son: (i) el sujeto activo, persona, órgano o particular revestido de funciones administrativas competente, (ii) sujeto pasivo, sobre quien recaen los efectos jurídicos del acto y quien ve alterados sus derechos o intereses (iii) eventualmente el Ministerio Público, quien interviene en defensa del ordenamiento jurídico y de los intereses sociales, y **(iv) el procedimiento formal (formalidades del acto) que varía según los derechos protegidos y el ámbito de aplicación y cuyo desconocimiento puede conducir a la vulneración del debido proceso.***

*De otra parte se encuentran sus elementos internos, tales como: (i) el objeto, constituido por todo aquello de que se ocupa el acto jurídicamente; (ii) los motivos (causa), entendida como el móvil o motivo determinante de la realización del acto administrativo o las circunstancias de hecho o de derecho que provocan su emisión, y (iii) **la finalidad, es decir, las metas que debe lograr la administración, es el fin propuesto, el cual debe ser de interés general, lícito, debe encontrarse dentro de la competencia del agente que realiza el acto y perseguirse por medio de los actos que la ley ha establecido, finalidad que se enmarca dentro del artículo 2º y los artículos 123 – inciso 2º y 209 constitucionales.***

*( ) Así las cosas, debe anotarse que **el acto administrativo es válido cuando ha sido emitido de conformidad con las normas jurídicas.** ( ) [De esta manera,] si de acuerdo con el principio de legalidad la actividad de la Administración debe someterse plenamente a las normas de superior jerarquía, mientras no se demuestre lo contrario, se infiere que una vez se tornen ejecutorios los actos que la comprenden, toda ella se ha realizado de conformidad con el ordenamiento y por ende queda cobijada con una presunción de legalidad.” (Negrilla fuera de texto)*

*6. Por otra parte, en cuanto al mérito u oportunidad para la emisión del acto jurídico administrativo, en la decisión citada supra, esa Alta Corporación razonó:*

"Y, finalmente el tercer elemento estudia básicamente **el mérito u oportunidad** para la producción del acto, que si bien no hace parte de su legalidad, como los dos anteriores, sí constituye un importante argumento de ciencia administrativa y de capacidad personal del sujeto intérprete de la voluntad administrativa para la adopción del acto administrativo. ( ) **El mérito no es otra cosa que el momento que obliga a la administración a manifestarse cuando verdadera y ciertamente es necesario para cumplir con la finalidad propuesta sin que este elemento pueda confundirse con el anterior.** ( )"  
(Negrilla y cursiva son nuestras)

7. En este orden de ideas, para la validez de los actos que emita la ANTV en el marco de la aplicación de las resoluciones 433 de 2012 y 650 de 2018, deben concurrir una serie de elementos acordes al ordenamiento jurídico, dentro de los cuales debemos destacar el debido proceso administrativo sancionatorio, así como su conformidad con la norma jurídica, al efecto, las resoluciones antes enunciadas. Lo anterior, sin desconocer la importancia del mérito de la sanción que, como quedó expuesto, converge con la finalidad impuesta por la ANTV al emitir los actos ya anotados.

II. La aplicación del principio de favorabilidad en los supuestos planteados en la consulta.

8. Visto lo anterior, de cara a las hipótesis planteadas por la ANTV, quizá lo primero sea destacar que, como parte del ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de la ANTV, esta debe tener plena exactitud acerca de la creación previa de la conducta tipo y su correspondiente sanción en relación con los hechos materia de investigación. Al efecto, que los hechos de los que se ocupa en los procesos en curso sean posteriores a la entrada en vigencia de la resolución 433 de 2012, o, según corresponda, a la resolución 650 de 2018.

9. A la par, si con la expedición de la Resolución 650 de 2018 se **crean, modifican o suprimen** tipos sancionatorios administrativos, haciendo estos más favorables al investigado, la existencia previa del tipo sancionatorio creado en la Resolución 433 de 2012 debería ceder ante el principio de favorabilidad por cuanto este viene a ser un principio de aplicación del derecho a la igualdad y, por ende, garantía a favor del ciudadano. Recordemos que el Consejo de Estado en fallo citado et supra nos enseña que la disposición sancionatoria es aplicable **"salvo en el caso de que la Ley no vigente al momento de ocurrir el hecho sancionado sea más favorable de aquélla regente al momento de la infracción sancionada."**

10. De suerte que, con independencia del estado en que se encuentre la actuación administrativa, bien en etapa preliminar, ora en fase de investigación formal, o, aún en etapa de conocimiento de un posible recurso, la regla precedente termina siendo de ineludible aplicación, y por tanto, de constatarse la situación posterior más favorable, la decisión de archivo del expediente deberá obedecer a si el tipo administrativo sancionatorio se ha suprimido por completo.

11. Por otra parte, si la Resolución 650 de 2018 creó o modificó un tipo administrativo sancionatorio más favorable para el indiciado, lo que correspondería no sería el archivo, pues también debemos tener presente el factor de "mérito" u oportunidad administrativa, que va de



*la mano con el deber de eficacia que nos impone el artículo 3.11 del CPACA y que orienta a la ANTV en el sentido de gestionar los procesos administrativos a su cargo para que se cumpla el fin de la función pública a su cargo. En tal sentido, con base en el principio de favorabilidad, lo que debería producirse es el estudio de la adecuación típica de los hechos probados en el proceso bajo los presupuestos de hecho del tipo creado o modificado y que se encuentre descrito en la norma más favorable.*

*12. A su turno, siguiendo la regla de norma previa, en aquellos casos en donde se presente un tipo administrativo sancionatorio de idéntico tenor entre las resoluciones 433 de 2012 y 650 de 2018, los procesos abiertos en vigencia de la primera de las disposiciones citadas deberán seguir su curso y ser decididos con base en los hechos probados y que se subsuman en el tipo descrito en la Resolución 433 de 2012, como quiera que no se advierte la posible aplicación del principio de favorabilidad.*

*13. Por último, acerca de la hipótesis planteada en el sentido de encontrar en la Resolución 650 de 2018 una sanción más gravosa para el procesado, en comparación con la descrita en la Resolución 433 de 2012, no se observa la aplicación del principio de favorabilidad, sino que, por el contrario, debe seguirse la regla de aplicación de norma previa al momento de la ocurrencia de los hechos y de la investigación. Por tanto, lo que debe constatare es que cronológicamente los hechos hayan tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigor de la Resolución 650 de 2018.*

*(...)"*

En atención a los criterios jurisprudenciales citados y de conformidad con el Concepto Jurídico emitido por el asesor externo de la Autoridad Nacional de Televisión, es importante expresar las siguientes consideraciones:

Por un lado, si bien es cierto que el concepto emitido por el abogado externo de la ANTV hace referencia exclusivamente a la Resolución No. 433 de 2013, la cual fue derogada mediante Resolución No. 650 de 2018, también es cierto que la situación jurídica que se presenta en la actuación administrativa que se decide en la presente resolución presenta las mismas situaciones fácticas, toda vez que de igual forma que sucedió en el caso analizado por el asesor externo, en este caso una resolución expedida por la Autoridad Nacional de televisión, la Resolución No. 0026 del doce (12) de enero de 2018, derogó el Acuerdo CNTV No. 010 del veinticuatro (24) de noviembre de 2006, acuerdo que contenía las disposiciones por cuyas presuntas infracciones se formularon los cargos del numeral quinto contenido en la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de 2017.

En ese mismo sentido, merece la pena expresar que la situación de fondo analizada en el concepto emitido por el abogado externo de la ANTV, trató de determinar si en los procedimientos administrativos sancionatorios podía aplicarse el principio de favorabilidad especialmente en los casos en los que la norma que sirvió de fundamento para la formulación de cargos ha desaparecido del mundo jurídico, llegando a la conclusión que a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, es incuestionable la aplicación del principio de favorabilidad en toda clase de actuaciones administrativas.

Descrito lo anterior y teniendo en cuenta que la regulación establecida en la Resolución No. 0026 del doce (12) de enero de 2018, la cual derogó el Acuerdo CNTV No. 010 del veinticuatro (24) de noviembre de 2006 por cuyo incumplimiento se formularon cargos a la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, mediante la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de 2017, cuyas infracciones fueron analizadas y se observa que se mantiene la obligación y no hay diferencia en la consecuencia sancionatoria, por lo tanto no hay favorabilidad de ninguna naturaleza.

Teniendo en cuenta lo anterior, procede esta Autoridad a pronunciarse sobre el escrito de descargos presentado mediante radicado No. 2018900000347 del cuatro (04) de enero de 2018 por lo cual se transcribirán los apartes pertinentes:

"(...)

### **1. CARENCIA TOTAL DEL OBJETO -HECHO SUPERADO**

*Según sentencia T-096 de 2006 la Sala Quinta de Revisión expuso lo siguiente:*

*"cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción".*

*En cuanto al primer cargo es pertinente señalar que efectivamente no se podía realizar ninguna entrega física en el momento de la visita puesto el (SIC) archivo de documentos se realiza en sitio físico, que no es posible mostrarlo ni mucho menos sacar copia en ese momento por carecer de él; mas sin embargo se ofreció el envío de los mismos proceso que podía tardar un día, alusión que el funcionario no dio ningún tipo de respuesta y peor aún adiciona en el cargo señalado en la resolución "hacer entrega al funcionario", cuando se ofreció su envío sin ningún tipo de respuesta, sin querer decir esto que no se tuviera la información ni mucho menos que se negando su entrega.*

*(...)"*

En consideración a los argumentos expuestos por la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S**, es importante precisar que en ejercicio de las amplias facultades con que cuenta la ANTV, entre estas las consagradas en el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, que dispone:

"(...)

*Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, licenciarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos*



*privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar;*

*(...)”*

En concordancia con el artículo 11 de la Ley 1507, la Autoridad Nacional de Televisión con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores del servicio de televisión por suscripción y de los licenciatarios del servicio de televisión comunitaria, realizó el diecinueve (19) de agosto de 2015 visita administrativa al concesionario de televisión **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S.**

De acuerdo a lo anterior, la Autoridad Nacional de Televisión se encuentra autorizada para realizar visitas con el fin de vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las diferentes normas que regulan a aquellos que tienen calidad de operadores de televisión en sus distintas modalidades a través de los contratos de suscripción o las licencias mediante las cuales se les autoriza para prestar el servicio de televisión; así las cosas, en desarrollo de esta función el diecinueve (19) de agosto de 2015 se realizó la visita No. 15106 en las instalaciones del operador de televisión investigado en la ciudad de Valledupar, departamento de Cesar, en la que se encontraron una serie de hallazgos que se dejaron precisados en el informe de visita No. 15106 de agosto de 2015, y posteriormente sirvieron como fundamento para iniciar la actuación administrativa sancionatoria que se adelanta en su contra dentro del expediente A-1909.

De otro lado, se fundamenta el operador investigado en señalar que la información solicitada por la ANTV en transcurso de la visita administrativa no pudo ser suministrada debido a que según el investigado:

*"(...)*

*no se podía realizar ninguna entrega física en el momento de la visita puesto el archivo de documentos se realiza en sitio físico, que no es posible mostrarlo ni mucho menos sacar copia en ese momento por carecer de él; mas sin embargo se ofreció el envío de los mismos proceso que podía tardar un día, alusión que el funcionario no dio ningún tipo de respuesta y peor aún adiciona en el cargo señalado en la resolución "hacer entrega al funcionario", cuando se ofreció su envío sin ningún tipo de respuesta, sin querer decir esto que no se tuviera la información ni mucho menos que se negando su entrega.*

*(...)”.*

Teniendo en cuenta lo manifestado por el operador es preciso explicar que en el acta de visita hay un acápite que denominado **"VI. OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN (ES) REPRESENTA (N) AL OPERADOR"** cuya finalidad es permitir a la sociedad expresar las observaciones respecto a la visita o lo encontrado en ella, garantizando la legalidad del acto y no caer en arbitrariedades por parte de la administración. Sin embargo, como se logra apreciar en el documento, no hay registro de comentarios, dudas, sugerencias o inquietudes por parte de la administradora y el jefe de personal, de acuerdo a esto, se puede deducir que tanto la administradora y el jefe de personal legal del operador no tuvieron desacuerdos frente a lo manifestado en dicho escrito. También se

puede evidenciar que los representantes de **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** firmaron el acta, lo que evidencia una aceptación expresa, por lo tanto no es de recibo para esta Autoridad su imposibilidad para entregar la información, toda vez que la misma debe permanecer en los archivos del operador de televisión, lo que conlleva a impedir el cumplimiento de nuestro objeto que no es otro que vigilar, controlar y seguir la correcta prestación del servicio de televisión, transgrediendo con su actuar las normas legales y reglamentarias citadas.

Continúa la sociedad investigada manifestando que:

"(...)

*En cuanto el segundo cargo si bien en su momento no se evidenciaron todos los canales en las parrillas entregadas no quiere decir esto que no estuviesen en funcionamiento porque como bien lo señalan no fue posible su verificación física; mas sin embargo DIGIMEDIOS TELEVISION SAS verifico la información entregada constatando que dichas parrillas entregadas de manera errónea correspondían al mes de noviembre de 2014 tal como lo señalo también el auditor de la ANTV y lo transcribe el mismo en el acta en la pagina (SIC) 6, situación que no fue verificada posteriormente por la AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN.*

(...)”.

Ahora bien, en la presente actuación administrativa sancionatoria, no se discute si a la fecha actual el operador ya corrigió su incumplimiento; sino, que al instante en que esta Autoridad procedió a realizar la visita con el fin de verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones por parte de **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** la sociedad no demostró que se encontraba cumpliendo a cabalidad la normatividad que rige el servicio de televisión por suscripción.

Por consiguiente, las visitas de verificación administrativas programadas, son de acuerdo al mandato legal establecido en el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, que otorga a la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-, las facultades que en materia de vigilancia, seguimiento y control del servicio público de televisión, anteriormente eran ejercidas por la extinta Comisión Nacional de Televisión, en adelante CNTV, por mandato del literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995; que el literal mencionado establece que era función de la CNTV, siendo ahora función de la ANTV,:

*"Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar."*

De acuerdo con lo anterior, lo que pretende la ANTV al realizar las visitas administrativas es verificar que los operadores de televisión por suscripción cumplan a cabalidad con sus obligaciones, con el fin de que se les garantice a sus suscriptores una buena prestación del servicio de televisión.

Continúa el recurrente argumentando:

"(...)

*Por lo anterior se debe tener en cuenta que la situación fáctica que origino el inicio de la investigación ya no es actual, esto quiere decir que los hechos relacionados con los presuntos incumplimientos se encuentran superados. Por lo tanto la inmediata y eficaz protección al derecho que reclama la entidad carece de actualidad y de una infracción presente. Conforme a lo anterior no es concordante que después de haber sido atendida la solicitud de manera interna en la empresa y sus acciones correctivas realizadas desaparece el riesgo, luego se pretenda después de veintisiete (27) meses obrar sobre un hecho ya corregido.*

(...)”.

Así mismo, en los argumentos anteriormente descritos, la sociedad investigada manifiesta que la situación fáctica que originó el inicio de la investigación ya no es actual, es decir, que los hechos relacionados con los presuntos incumplimientos se encuentran superados; frente a dichos argumentos, encuentra esta Autoridad que la sociedad investigada está aceptando expresamente que el diecinueve (19) de agosto de 2015, fecha en la que la ANTV realizó la visita de verificación administrativa, el operador no se encontraba cumpliendo con sus deberes legales y reglamentarios.

Por otra parte, **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S**, respecto a los cargos formulados en el numeral 5º de la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de 2017, expresa que el hecho generador del inicio de la actuación administrativa sancionatoria ya está corregido, por ende, hay carencia total de objeto; frente a este argumento la ANTV considera pertinente hacer referencia a lo que se ha entendido vía jurisprudencial sobre la teoría de la carencia de objeto por hecho superado:

En efecto la Corte Constitucional, en sentencia T-481 del dieciséis (16) de junio de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, señaló frente a la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, lo siguiente:

*"(...) por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, es precisamente este fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una carencia actual de objeto para decidir..."*

Entiende esta Autoridad que, para la configuración de la teoría de la carencia de objeto por hecho superado, es necesaria la existencia de una conducta que genere un perjuicio, la cual se dispersa con el paso del tiempo, desapareciendo en este sentido no solo el perjuicio generado sino también la causa que lo ocasionó. No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta que las normas quebrantadas que regulan la prestación del servicio por parte de los operadores del servicio de televisión por suscripción están vigentes; se configuran para unos hechos determinados relacionados con una normatividad vigente y previamente establecida, motivo por el cual no puede hablarse de un hecho superado, toda vez que el mismo no se configuró.

A la luz de la jurisprudencia, un hecho se considera superado cuando "(...) *la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada (...)*"; para el caso concreto, la sociedad investigada se encontraba en la obligación de acatar siempre y en todo momento las disposiciones establecidas en la ley, y no a discrecionalidad. En consideración, concluye esta entidad que no se configuró la teoría de "*carencia de objeto por hecho superado*", toda vez que no se encuentran argumentos y soportes que demuestren el cumplimiento de la obligación de la sociedad investigada, por lo tanto el objeto que dio origen a la presente actuación, sigue existiendo.

Al respecto señala la Corte en sentencia T-358-14 lo siguiente:

"(...)

*La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir. Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que procede es el resarcimiento del daño causado por la vulneración del derecho fundamental.*

(...)".

El Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, en la sección quinta del 23 de febrero de 2012 señala:

"(...) El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han hecho referencia a la "*carencia actual de objeto*", fundamentada ya en la existencia de un hecho superado o en un daño consumado<sup>[1]</sup>.

***La carencia actual de objeto por hecho superado se constituye cuando lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del***

[1] Sentencias del Consejo de Estado del 24 de junio de 2010, rad. 2010-00048 ; del 4 de agosto de 2011, rad. 2011-0874 y del 2 e febrero de 2012, rad. 2011-01650, M.P. Susana Buitrago Valencia. Y de la Corte Constitucional, sentencias: T-233 de 2006, T-1035 de 2005, T-935 y T-936 de 2002,; T-1072 de 2003, T-539 de 2003, T-923 de 2002, T-1207 de 2001, T-428 de 1998, T-184 de 2006, T-808 de 2005, T-980 de 2004, T-696, T-436 de 2002, T-288 de 2004, T-662 de 2005, T-496 de 2003, T-084 de 2003, T-498 de 2000 y T-223/08.

*juez de tutela, sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a los derechos fundamentales ha cesado. Las Corporaciones han entendido que el reclamo ha sido satisfecho, y, en consecuencia, la tutela pierde eficacia y razón, al extinguirse su objeto jurídico resultando inocua cualquier orden judicial. Toda vez que "la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío"<sup>21</sup>".*

*Por el contrario, hay una **carencia actual de objeto por la presencia de un daño consumado** cuando, al igual que en la hipótesis anterior, se constata que las condiciones de hecho que generan la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales del accionante cesan, desaparecen o se superan pero, sin existir una reparación del derecho. Por ello, en los eventos en que se presente una carencia actual de objeto por haber un daño consumado es deber del juez de tutela analizar de fondo el asunto y, si es del caso impartir una orden que, en cierta medida repare ese perjuicio<sup>31</sup>.*

*Es pertinente, entonces, verificar si, en el caso bajo estudio, la Sala se encuentra frente a la figura de la carencia actual de objeto, por cualquiera de los eventos acogidos por la jurisprudencia<sup>41</sup>.*

*(...)"*

En ese orden de ideas y revisada la información y hallazgos evidenciados en el Acta de Visita y en el Informe No. 15106, y los argumentos expresados por el operador en su escrito de descargos, en relación con los cargos formulados en el literal 5º de la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de 2017, encuentra probado la ANTV que **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** no entregó copia de los contratos de suscripción y se evidenció que no cuenta con un canal de producción nacional, ni diez (10) canales codificados temáticos satelitales de origen nacional, situación que configura una infracción a la disposición legal.

En este orden de ideas, es del caso tener en cuenta que la sociedad investigada con su actuar omisivo, impidió que la ANTV, desplegara su función de Inspección, Vigilancia, Seguimiento y Control, y que este por mandato legal se encuentra obligado a dar respuesta de manera oportuna a los requerimientos efectuados por el regulador y revisados los descargos aportados por la sociedad investigada, encuentra la ANTV que los mismos no controvierten los hechos investigados por lo cual se le formularon cargos en la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de 2017, y que por el contrario son corroborados a partir de la aceptación de no responder de manera oportuna al requerimiento efectuado por el regulador.

Al respecto es importante señalar que las visitas efectuadas por la ANTV a los diferentes operadores del servicio de televisión constituyen actividades continuas que realiza la ANTV en el marco de sus funciones, las cuales tienen por objeto verificar las condiciones de operación del servicio de televisión por parte de los concesionarios y licenciarios que cuentan con título habilitante.

[2] T-519 de 1992 y T-112/2010. Sentencias C-540 de 2007 y T-218/08.

[3] Sentencia T-449/08 Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. (8 de mayo de 2008).

[4] Consejo de Estado. Consejera ponente: SUSANA BUITRAGO VALENCIA. (23 de febrero de 2012).

Adicional a las razones expuestas, no son de recibo los argumentos expuestos por la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** por cuanto estos no van encaminados a demostrar que la sociedad investigada cumplió con lo solicitado en la visita administrativa llevada a cabo el diecinueve (19) de agosto de 2015, por el contrario, el operador acepta de manera expresa que efectivamente no se suministró la información requerida por esta Autoridad al señalar que la entrega no pudo realizarse por no tener acceso al archivo físico y tampoco se logró evidenciar que estuvieran transmitiendo el canal de producción propia y los canales temáticos satelitales ya que el operador no contaba con un televisor en su oficina administrativa.

Seguidamente el operador manifiesta que "(...) *luego se pretenda después de veintisiete (27) meses obrar sobre un hecho ya corregido(...)*", es preciso aclararle que esta Autoridad cuenta con tres (03) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos es decir desde el diecinueve (19) de agosto de 2015 fecha de la visita administrativa realizada a **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** para dar inicio a una actuación administrativa sancionatoria y así mismo tomar una decisión de fondo frente a la misma de conformidad con el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por tal razón no es de recibo para esta Autoridad lo manifestado por el operador.

Por lo anterior, vale concluir, que el argumento esbozado por el operador no controvierte los cargos formulados.

Continúa el operador alegando:

"(...)

## **2.FALSA MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO**

*El artículo 29 de la Constitución Nacional advierte*

*"ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio".*

*De la lectura anterior artículo, se interpreta que para que una persona natural o jurídica, sea juzgada y sancionada debe existir norma que fundamente la decisión impuesta, pues de lo contrario habría violado al debido proceso.*

*Una vez revisados los cargos es pertinente dar a conocer que la transcrito en la resolución 1970 de 21 de noviembre de 2017, no coincide con lo escrito en el acta para ambos cargos, lo cual hace que el proceso administrativo pierda su veracidad puesto se esta motivando los cargos con palabras adicionales.*

*(...)"*



Respecto a lo anterior, considera esta Autoridad, que dentro de la presente actuación administrativa no existe falsa motivación como lo alega el operador de televisión, ya que los hallazgos producto de la visita del diecinueve (19) de agosto de 2015 fueron consignados en el acta e informe de visita No. 15106, y sirvieron como fundamento para el inicio y desarrollo de la actuación administrativa sancionatoria contenida en el expediente A-1909.

Es relevante manifestar que las actuaciones administrativas sancionatorias desplegadas por la Autoridad Nacional de Televisión se han surtido observando y garantizando todos los postulados del derecho al debido proceso, noción de jerarquía constitucional señalada en el artículo 29 de nuestra Carta Política.

Frente a la falsa motivación de un acto administrativo, el Consejo de Estado en Sentencia 16660 del 15 de marzo de 2012, magistrado ponente Hugo Fernando Bastidas Barcenás, expresa:

*"En efecto, la falsa motivación, como lo ha reiterado la Sala, se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente. Ahora bien, los hechos que fundamentan la decisión administrativa deben ser reales y la realidad, por supuesto, siempre será una sola. Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración supuso que existía al tomar la decisión. Todo lo anterior implica que quien acude a la jurisdicción para alegar la falsa motivación, debe, como mínimo, señalar cuál es el hecho o hechos que el funcionario tuvo en cuenta para tomar la decisión y que en realidad no existieron, o, en qué consiste la errada interpretación de esos hechos."* [Sentencia 16660 del 15 de marzo de 2012]

Teniendo en cuenta lo expresado por el Consejo de Estado, existe falsa motivación del acto administrativo cuando se presenta inexistencia de hecho, o cuando existiendo unos hechos, éstos han sido calificados erradamente desde el punto de vista jurídico<sup>2</sup>, razón por lo cual en el presente caso no es posible aceptar el argumento presentado por el representante legal de la sociedad investigada "FALSA MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO (SIC)", toda vez que nos encontramos presuntamente frente a un incumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias y el cargo formulado en la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de

<sup>1</sup> Sentencia 16660 del 15 de marzo de 2012, Consejo de Estado. MP. Hugo Fernando Bastidas Barcenás

<sup>2</sup> Sentencia No. 5501 Consejo de Estado- Sección Primera de 17 de febrero de 2000. MP Manuel Santiago Urueta Oyola. FALSA MOTIVACIÓN - Concepto y clases : por error de hecho, La falsa motivación se presenta cuando la situación de hecho que sirve de fundamento al acto administrativo se revela inexistente, o cuando existiendo unos hechos, éstos han sido calificados erradamente desde el punto de vista jurídico, generándose en la primera hipótesis, el error de hecho, y en la segunda, el error de derecho,



2017, se llevó a cabo de conformidad con lo evidenciado en la visita de carácter administrativo realizada el diecinueve (19) de agosto de 2015.

De acuerdo con lo anterior cabe advertir que los operadores de televisión deben en todo momento sujetarse a las normas y reglamentaciones expedidas por la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, ya que son sujetos de los deberes y obligaciones que esta les imparte en cuanto son sujetos de control, por cuanto de esta manera la Entidad cumple con el objeto de vigilar la prestación del servicio en aras de dar cumplimiento a los objetivos y fines de la televisión y en este orden de ideas es parte de la responsabilidad del operador estar atento a dar estricto cumplimiento a las normas vigentes y reglamentaciones impartidas por la entidad con el objeto de prestar un servicio de televisión adecuado.

Finalmente, es prudente aclararle al operador que los cargos formulados en la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de 2017, se soportarían en el informe de visita 15106, en cual es un análisis del acta de visita 15106 del diecinueve (19) de agosto de 2015, y específicamente en lo consignado en el numeral 3.12 del acta de visita No. 15106 relacionado con la revisión de aspectos administrativos, en el cual manifiesta que se le solicitó al operador copia de los contratos de suscritos y a los numerales 1.1, 1.2 y 1.3 de la misma acta coherente con la revisión de aspectos relacionados con la programación.

En concordancia con las consideraciones precedentes y de un análisis objetivo frente a los hechos, pruebas y documentos obrantes en el sublite, concluye la ANTV, que la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** no desvirtuó los cargos formulados mediante la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de 2017, y se debe proceder con la imposición de la sanción que por tal efecto corresponda.

Previo a realizar el análisis de la tasación sancionatoria es importante precisar lo siguiente:

Frente al primer cargo formulado dentro de la presente investigación, inspirado en el artículo 39 del Acuerdo 10 de 2006, se observa que a pesar de haber sido derogado el Acuerdo 10 de 2006 por la Resolución No. 026 de 2018, lo dispuesto por el artículo 39 del Acuerdo 10 de 2006 se replica en el artículo 25 de la Resolución No. 026 de 2018, y adicionalmente el cargo también fue inspirado en el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, precepto legal que goza de total vigencia y exigibilidad, así mismo no hay diferencia en la consecuencia sancionatoria en la norma posterior, en ese sentido no habría lugar a la aplicación de favorabilidad.

Respecto al segundo cargo, observa esta Autoridad que el mismo fue inspirado en el artículo 12 del Acuerdo 10 de 2006, norma reglamentaria que como ya se mencionó fue derogada por la Resolución No. 0026 de 2018, la cual en su artículo 28 replica la conducta tipificada por el artículo 12 del Acuerdo 10 de 2006 y, mantiene la obligación de tener un canal de producción nacional, sin establecer un mínimo de horas diarias de producción nacional, en ese sentido, la disposición posterior resulta mucho más favorable para el operador ya que no le exige un mínimo de horas como lo hacía el artículo 12 del Acuerdo 10 de 2006. Adicionalmente, dentro del segundo cargo se cita el artículo 4 del Acuerdo 01 de 2009 el cual establece un estímulo para los operadores de televisión por suscripción, que consiste en que por la distribución de 10 canales temáticos satelitales de origen nacional se exime al operador de la obligación contenida en el

artículo 12 del Acuerdo 10 de 2006, mientras que la Resolución No. 026 de 2018 establece en su artículo 30 que será una obligación de los operadores emitir mínimo 5 canales temáticos satelitales de origen nacional, generando una nueva obligación, por lo que resulta más favorable para el investigado que se tenga en cuenta lo dispuesto en el artículo 04 del Acuerdo 01 de 2009, que resulta más favorable.

Para este segundo cargo la consecuencia sancionatoria es la misma y no habría lugar a aplicar el estímulo otorgado por el artículo 4 del Acuerdo 01 de 2009 porque el operador no tenía en su programación ningún canal temático satelital de producción nacional.

CARGO	Acuerdo No. 010 de 2006	Resolución No. 026 de 2018	Consecuencia sancionatoria
<b>PRIMER CARGO</b>	<p><b>ARTÍCULO 39. VIGILANCIA Y CONTROL.</b> De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, la Comisión Nacional de Televisión efectuará visitas de inspección a cada uno de los prestatarios del servicio de televisión por suscripción y verificará el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.</p> <p>PARÁGRAFO. En todo caso, la Comisión Nacional de Televisión podrá contratar con entidades públicas nacionales o internacionales, las actividades que considere necesarias para el ejercicio efectivo de sus funciones de control y vigilancia.</p>	<p><b>ARTÍCULO 25. OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN.</b> Los concesionarios del servicio de televisión por suscripción están obligados a remitir o suministrar la información que la Autoridad Nacional de Televisión requiera para el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.</p>	<p>Se mantiene la obligación y no hay diferencia en la consecuencia sancionatoria, por lo tanto, no hay favorabilidad de ninguna naturaleza.</p> <p>Así mismo la conducta se encuentra tipificada en el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995.</p>

CARGO	Acuerdo No. 010 de 2006	Resolución No. 026 de 2018	Consecuencia sancionatoria
<b>SEGUNDO CARGO</b>	<p><b>Artículo 12. PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN</b></p>	<p><b>Artículo 28. CANAL DE PRODUCCIÓN PROPIA.</b> Con el objeto de fomentar la</p>	<p>Se mantiene la obligación de tener un canal de producción nacional, sin embargo,</p>

	<p><b>NACIONAL.</b></p> <p>Con el objeto de fomentar la industria de televisión colombiana, el concesionario deberá emitir como mínimo un canal con cinco (5) horas diarias de producción nacional.</p> <p>Parágrafo 1. La Comisión Nacional de Televisión previo análisis y evaluación del desarrollo de la industria de la televisión por suscripción, podrá aumentar de manera gradual la exigencia de producción nacional.</p> <p>Parágrafo 2. Los operadores del servicio de televisión por suscripción deberán conservar al menos por seis (6) meses, las grabaciones de los programas de producción propia que emitan.</p>	<p>industria de televisión Colombiana, los concesionarios del servicio de televisión por suscripción, podrán producir y emitir un canal de producción nacional propia. Entendiendo por producción propia aquellos programas realizados directamente por el concesionario o contratados por terceros, mas no la transmisión de canales con programación nacional.</p> <p>Los concesionarios deberán publicar en su página web la parrilla de programación de dicho canal, indicando el género de los programas y conservar al menos por seis (6) meses, la grabación de la emisión diaria de la programación.</p>	<p>teniendo en cuenta que en la Resolución No. 026 de 2018, no se establece un mínimo de horas diarias de producción nacional, la disposición posterior resulta mucho más favorable para el operador.</p> <p>Sin embargo, es importante precisar que la consecuencia sancionatoria es la misma.</p>
	<b>Acuerdo 01 de 2009</b>	<b>Resolución No. 026 de 2018</b>	
	<p><b>Artículo 4. ESTIMULOS POR LA DISTRIBUCIÓN DE CANALES TEMÁTICOS SATELITALES DE ORIGEN NACIONAL.</b></p> <p>Los operadores de televisión por suscripción, cableada y satelital, que incluyan dentro de la parrilla de programación de todos los municipios donde tengan cobertura un mínimo de diez (10) canales</p>	<p><b>Artículo 30 CANALES TEMÁTICOS SATELITALES.</b></p> <p>Con el objeto de fomentar la industria de la televisión colombiana, los concesionarios del servicio de televisión por suscripción deberán incluir dentro de su parrilla de programación como mínimo cinco (5) canales temáticos</p>	<p>En este caso hay una modificación sustancial de una disposición frente a la otra, ya que en el Acuerdo 01 de 2009, no era obligatorio incluir canales codificados temáticos satelitales en la parrilla de programación, su inclusión (mínimo 10), se estableció como un estímulo para los operadores, mientras que en la Resolución 026 de 2018, se establece como una obligación para los</p>

	codificados temáticos satelitales de origen nacional, quedarán exonerados de la obligación de producir el canal de producción nacional a que se refiere el artículo 12 del acuerdo 010 de 2006.	satelitales de origen nacional, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de la CNTV No. 001 de 2009 o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. Quedaran exentos del cumplimiento de la obligación establecida en el presente artículo aquellos operadores que cuenten con el canal de producción propia de que trata el artículo 28 de la presente Resolución, siempre que el mismo se emitan mínimo cinco (5) horas diarias de programación nacional propia.	operadores la inclusión de mínimo 5 canales codificados temáticos satelitales, y adicionalmente como un eximente de la obligación contenida en el artículo 28 de la Resolución No. 026 de 2018.
--	--	---	--

Teniendo en cuenta el cuadro anterior y el concepto del doctor Oscar Ibañez del 22 de junio de 2018, donde expresa:

En ese sentido, merece la pena mencionar que la Dirección de la ANTV solicitó un nuevo concepto jurídico al abogado externo doctor OSCAR IBAÑEZ IBARRA sobre "Aplicación principio de favorabilidad en procesos sancionatorios" en el cual se expresa lo siguiente:

"(...)

*La Autoridad Nacional de Televisión recientemente expidió la Resolución 650 de 2018 "Por la cual se Reglamenta el Servicio de Televisión Comunitaria". Acto administrativo que expresamente derogó la Resolución 433 de 2013 "Por la cual se Reglamenta Parcialmente el Servicio de Televisión Comunitaria Cerrada sin Ánimo de Lucro".*

*Teniendo en cuenta lo anterior, de manera atenta se solicita su concepto para indicar cómo operaría el principio de favorabilidad y de legalidad, en los siguientes eventos:*

*1. Hechos de incumplimiento ocurridos y probados (visita realizada) en vigencia de la Resolución 433 de 2013, frente a los cuales a la fecha no se ha emitido acto administrativo de apertura y formulación de cargos.*

*2. Investigaciones en las cuales ya se notificó el acto administrativo de apertura y formulación de cargos con conductas tipificadas en la Resolución 433 de 2013, sin que a la fecha se haya emitido decisión de fondo; en donde:*

*2.1. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 desaparece o se modifica sustancialmente en la Resolución 650 de 2018.*

*2.2. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 se replica en idénticos términos en la Resolución 650 de 2018, pero con consecuencias sancionatorias más gravosas en la Resolución 650 de 2018.*

*2.3. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 se replica en idénticos términos en la Resolución 650 de 2018, pero con consecuencias sancionatorias menos gravosas en la Resolución 650 de 2018.*

*2.4. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 se replica en idénticos términos en la Resolución 650 de 2018, con consecuencias sancionatorias idénticas.*

*3. Investigaciones en donde ya se notificó el acto administrativo de apertura y formulación de cargos con conductas tipificadas en la Resolución 433 de 2013, con un acto administrativo sancionatorio emitido en primera instancia y que se encuentran en trámite de recurso; en donde:*

*3.1. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 desaparece o se modifica sustancialmente en la Resolución 650 de 2018.*

*3.2. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 se replica en idénticos términos en la Resolución 650 de 2018, pero con consecuencias sancionatorias más gravosas en la Resolución 650 de 2018.*

*3.3. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 se replica en idénticos términos en la Resolución 650 de 2018, pero con consecuencias sancionatorias menos gravosas en la Resolución 650 de 2018.*

*3.4. La conducta tipificada en la Resolución 433 de 2013 se replica en idénticos términos en la Resolución 650 de 2018, con consecuencias sancionatorias idénticas.*

*Adicional a lo anterior, y en el caso que se considere que al desaparecer la conducta típica en consecuencia no habría lugar a continuar con la investigación, se solicita indicar qué actuación administrativa posterior debe surtir para dar fin a la investigación.*

*1. Elementos formales y materiales del ejercicio de la potestad sancionatoria.*

*2. Al tenor de su consulta, y dado que la misma se enmarca en el escenario del ejercicio de la potestad sancionatoria de la ANTV, sea lo primero resaltar la postura de la Sección Primera del Consejo de Estado, en lo que atañe a los rasgos formales y materiales que deben concurrir para que se pueda verificar legítimamente la existencia de una sanción administrativa. En su oportunidad ha sostenido la Sección:*

"Para la Sala es perceptible que en general el ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa, en tanto que manifestación del ius puniendi del Estado confiado a autoridades administrativas, presenta unos rasgos formales y materiales que deben concurrir en un caso concreto para que se pueda verificar legítimamente la existencia de una sanción administrativa. En efecto, **desde una perspectiva formal**, en virtud del principio de legalidad imperante en este ámbito, resulta indispensable que exista una norma con rango legal que tipifique una determinada conducta como infracción administrativa y establezca de manera paralela la correspondiente sanción, explícitamente calificada de tal. En últimas, conforme ha sido señalado por esta Corporación, "el principio de legalidad de las sanciones exige: (i) que el señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el legislador, **a quien le corresponde crear, modificar o suprimir los tipos penales y establecer, modificar o suprimir sanciones;** (ii) **que este señalamiento sea previo al momento de la comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la sanción, salvo en el caso de que la Ley no vigente al momento de ocurrir el hecho sancionado sea más favorable de aquélla regente al momento de la infracción sancionada;** (iii) que la sanción se determine no sólo previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no determinable". De otra parte, desde una perspectiva material, es preciso que la consecuencia jurídica expresamente calificada por la norma legal como sanción administrativa entrañe un mal coactivamente impuesto por la Administración al particular, e implique, por ende, la privación, el recorte o la afectación de un derecho, interés o situación jurídica del infractor como respuesta a la realización de un comportamiento previamente tipificado como infracción o falta administrativa. La sanción administrativa tendrá entonces, por definición, un sentido punitivo, retributivo de la transgresión cometida, por lo cual le será inherente un "carácter aflictivo" y será siempre la "respuesta represiva del Estado al incumplimiento de las obligaciones, deberes y mandatos generales por parte de sus destinatarios." (Negrilla fuera de texto) 1

3. A la luz del precedente previamente citado, desde el punto de vista formal, tenemos que es a la ANTV a quién la ley ha facultado, como autoridad regulatoria, para crear o suprimir los tipos administrativos sancionatorios, así como para establecer, modificar o suprimir tales sanciones. Así mismo, que la conducta descrita en la norma y su correspondiente sanción sean previas a la comisión del ilícito administrativo "salvo en el caso de que la Ley no vigente al momento **de ocurrir el hecho sancionado sea más favorable** de aquélla regente al momento de la infracción sancionada." 2

4. Sobre la aplicación del principio de favorabilidad, tal y como ya lo habíamos dicho a la ANTV en concepto previo, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación, manifestó que este debería "( ) **operar no solo en las actuaciones judiciales sino en toda clase de actuaciones administrativas**". En dicha sentencia, la precitada Corporación aseveró:

"Estas mismas consideraciones que hizo la Corte [Sentencia C-922 de 2001] tratándose del régimen sancionatorio aplicable a infracciones cambiarias en las materias de competencia de la DIAN deben también ser aplicadas en los asuntos sancionatorios cambiarios de competencia de la Superintendencia de Sociedades, pues no existe razón alguna que justifique ese trato diferente. Lo contrario, claramente constituiría un agravio al principio constitucional de igualdad



ante la ley. En el anterior contexto, en esta providencia la Sección Primera unifica su criterio en el sentido de señalar que el principio de favorabilidad es aplicable en las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar **las infracciones al régimen cambiario, por tratarse de una garantía mínima del debido proceso, el cual es un derecho constitucional fundamental que debe operar no solo en las actuaciones judiciales sino en toda clase de actuaciones administrativas.**

( )

**Cuando se impuso la sanción a la demandante la conducta por la cual fue sancionada**, esto es, el registro extemporáneo de la operación de inversión extranjera mediante la presentación del Formulario No. 11, **no constituía infracción cambiaria, aunque sí lo era cuando se presentó dicha circunstancia**, esto es, para el mes de octubre de 2008. En el anterior contexto, encuentra la Sala que la Superintendencia de Sociedades desconoció lo dispuesto en el artículo 29 de la C.P. al no aplicar el principio de favorabilidad en la actuación administrativa sancionatoria que adelantó contra la sociedad GRUPO MCM S.A. DE C.V., puesto que para la fecha en que le impuso la sanción de multa demandada el registro extemporáneo de la operación de inversión extranjera que realizó no constituía una infracción cambiaria a la luz de lo reglado en el Decreto 4800 de 2010, norma que modificó el Decreto 2080 de 2000 y que le debió aplicar por serle más favorable.”(Negrilla fuera de texto)

5. Ahora bien, cómo acto administrativo, la decisión que contiene una decisión de índole sancionatorio debe contener los elementos de validez propios de todo acto definitivo que ponga fin a una actuación administrativa de carácter coercitivo para que aquél conserve su validez. En tal sentido, la doctrina de la Sección Tercera del Consejo de Estado nos enseña que:

"Por acto administrativo de contenido individual se entiende toda manifestación unilateral, por regla general de voluntad, de quienes ejercen funciones administrativas, tendiente a la producción de efectos jurídicos.

De esta manera se dice que son 5 los elementos claves para llegar a la conclusión de que existe un acto administrativo: (i) la expresión o manifestación concreta de la administración; (ii) la expresión unilateral del querer de la administración; (iii) el ejercicio de la función administrativa mediante la declaración de la voluntad de la administración; (iv) que su contenido material equivalga al ejercicio de una función administrativa así provenga de cualquiera de los órganos del poder público o de particulares. (v) que posea la fuerza suficiente para decidir y crear situaciones jurídicas a partir de su contenido, de manera que esta se configura como la característica reveladora o de mayor importancia.

(...)

Ahora bien, para que el acto administrativo sea válido deben concurrir una serie de elementos acordes al ordenamiento jurídico entre tanto que cualquier falla en su estructura podría afectar la legalidad del acto. En el primer plano podemos mencionar los elementos esenciales del acto,



dentro de los cuales se encuentran los elementos externos, estos son: (i) el sujeto activo, persona, órgano o particular revestido de funciones administrativas competente, (ii) sujeto pasivo, sobre quien recaen los efectos jurídicos del acto y quien ve alterados sus derechos o intereses (iii) eventualmente el Ministerio Público, quien interviene en defensa del ordenamiento jurídico y de los intereses sociales, y **(iv) el procedimiento formal (formalidades del acto) que varía según los derechos protegidos y el ámbito de aplicación y cuyo desconocimiento puede conducir a la vulneración del debido proceso.**

De otra parte se encuentran sus elementos internos, tales como: (i) el objeto, constituido por todo aquello de que se ocupa el acto jurídicamente; (ii) los motivos (causa), entendida como el móvil o motivo determinante de la realización del acto administrativo o las circunstancias de hecho o de derecho que provocan su emisión, y **(iii) la finalidad, es decir, las metas que debe lograr la administración, es el fin propuesto, el cual debe ser de interés general, lícito, debe encontrarse dentro de la competencia del agente que realiza el acto y perseguirse por medio de los actos que la ley ha establecido, finalidad que se enmarca dentro del artículo 2º y los artículos 123 – inciso 2º y 209 constitucionales.**

( ) Así las cosas, debe anotarse que **el acto administrativo es válido cuando ha sido emitido de conformidad con las normas jurídicas.** ( ) [De esta manera,] si de acuerdo con el principio de legalidad la actividad de la Administración debe someterse plenamente a las normas de superior jerarquía, mientras no se demuestre lo contrario, se infiere que una vez se tornen ejecutorios los actos que la comprenden, toda ella se ha realizado de conformidad con el ordenamiento y por ende queda cobijada con una presunción de legalidad." (Negrilla fuera de texto)

6. Por otra parte, en cuanto al mérito u oportunidad para la emisión del acto jurídico administrativo, en la decisión citada supra, esa Alta Corporación razonó:

"Y, finalmente el tercer elemento estudia básicamente **el mérito u oportunidad** para la producción del acto, que si bien no hace parte de su legalidad, como los dos anteriores, sí constituye un importante argumento de ciencia administrativa y de capacidad personal del sujeto intérprete de la voluntad administrativa para la adopción del acto administrativo. ( ) **El mérito no es otra cosa que el momento que obliga a la administración a manifestarse cuando verdadera y ciertamente es necesario para cumplir con la finalidad propuesta sin que este elemento pueda confundirse con el anterior.** ( )" (Negrilla y cursiva son nuestras)

7. En este orden de ideas, para la validez de los actos que emita la ANTV en el marco de la aplicación de las resoluciones 433 de 2012 y 650 de 2018, deben concurrir una serie de elementos acordes al ordenamiento jurídico, dentro de los cuales debemos destacar el debido proceso administrativo sancionatorio, así como su conformidad con la norma jurídica, al efecto, las resoluciones antes enunciadas. Lo anterior, sin desconocer la importancia del mérito de la sanción que, como quedó expuesto, converge con la finalidad impuesta por la ANTV al emitir los actos ya anotados.

*II. La aplicación del principio de favorabilidad en los supuestos planteados en la consulta.*

8. Visto lo anterior, de cara a las hipótesis planteadas por la ANTV, quizá lo primero sea destacar que, como parte del ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de la ANTV, esta debe tener plena exactitud acerca de la creación previa de la conducta tipo y su correspondiente sanción en relación con los hechos materia de investigación. Al efecto, que los hechos de los que se ocupa en los procesos en curso sean posteriores a la entrada en vigencia de la resolución 433 de 2012, o, según corresponda, a la resolución 650 de 2018.

9. A la par, si con la expedición de la Resolución 650 de 2018 se **crean, modifican o suprimen** tipos sancionatorios administrativos, haciendo estos más favorables al investigado, la existencia previa del tipo sancionatorio creado en la Resolución 433 de 2012 debería ceder ante el principio de favorabilidad por cuanto este viene a ser un principio de aplicación del derecho a la igualdad y, por ende, garantía a favor del ciudadano. Recordemos que el Consejo de Estado en fallo citado et supra nos enseña que la disposición sancionatoria es aplicable **"salvo en el caso de que la Ley no vigente al momento de ocurrir el hecho sancionado sea más favorable de aquella regente al momento de la infracción sancionada."**

10. De suerte que, con independencia del estado en que se encuentre la actuación administrativa, bien en etapa preliminar, ora en fase de investigación formal, o, aún en etapa de conocimiento de un posible recurso, la regla precedente termina siendo de ineludible aplicación, y por tanto, de constatarse la situación posterior más favorable, la decisión de archivo del expediente deberá obedecer a si el tipo administrativo sancionatorio se ha suprimido por completo.

11. Por otra parte, si la Resolución 650 de 2018 creó o modificó un tipo administrativo sancionatorio más favorable para el indiciado, lo que correspondería no sería el archivo, pues también debemos tener presente el factor de "mérito" u oportunidad administrativa, que va de la mano con el deber de eficacia que nos impone el artículo 3.11 del CPACA y que orienta a la ANTV en el sentido de gestionar los procesos administrativos a su cargo para que se cumpla el fin de la función pública a su cargo. En tal sentido, con base en el principio de favorabilidad, lo que debería producirse es el estudio de la adecuación típica de los hechos probados en el proceso bajo los presupuestos de hecho del tipo creado o modificado y que se encuentre descrito en la norma más favorable.

12. A su turno, siguiendo la regla de norma previa, en aquellos casos en dónde se presente un tipo administrativo sancionatorio de idéntico tenor entre las resoluciones 433 de 2012 y 650 de 2018, los procesos abiertos en vigencia de la primera de las disposiciones citadas deberán seguir su curso y ser decididos con base en los hechos probados y que se subsuman en el tipo descrito en la Resolución 433 de 2012, como quiera que no se advierte la posible aplicación del principio de favorabilidad.

13. Por último, acerca de la hipótesis planteada en el sentido de encontrar en la Resolución 650 de 2018 una sanción más gravosa para el procesado, en comparación con la descrita en la

*Resolución 433 de 2012, no se observa la aplicación del principio de favorabilidad, sino que, por el contrario, debe seguirse la regla de aplicación de norma previa al momento de la ocurrencia de los hechos y de la investigación. Por tanto, lo que debe constatarse es que cronológicamente los hechos hayan tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigor de la Resolución 650 de 2018.*

*(...)"*

En atención a los criterios jurisprudenciales citados y de conformidad con el Concepto Jurídico emitido por el asesor externo de la Autoridad Nacional de Televisión, es importante expresar las siguientes consideraciones:

Por un lado, si bien es cierto que el concepto emitido por el abogado externo de la ANTV hace referencia exclusivamente a la Resolución No. 433 de 2013, la cual fue derogada mediante Resolución No. 650 de 2018, también es cierto que la situación jurídica que se presenta en la actuación administrativa que se decide en la presente resolución presenta las mismas situaciones fácticas, toda vez que de igual forma que sucedió en el caso analizado por el asesor externo, en este caso una resolución expedida por la Autoridad Nacional de televisión, la Resolución No. 0026 del doce (12) de enero de 2018, derogó el Acuerdo CNTV No. 010 del veinticuatro (24) de noviembre de 2006, acuerdo que contenía las disposiciones por cuyas presuntas infracciones se formularon los cargos del numeral quinto contenido en la Resolución No. 1970 del veintiuno (21) de noviembre de 2017.

En ese mismo sentido, merece la pena expresar que la situación de fondo analizada en el concepto emitido por el abogado externo de la ANTV, trató de determinar si en los procedimientos administrativos sancionatorios podía aplicarse el principio de favorabilidad especialmente en los casos en los que la norma que sirvió de fundamento para la formulación de cargos ha desaparecido del mundo jurídico, llegando a la conclusión que a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, es incuestionable la aplicación del principio de favorabilidad en toda clase de actuaciones administrativas.

## **8. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN**

En lo que concierne a la determinación de la sanción, el régimen jurídico del servicio público de televisión consagra como sanciones a aplicar a los concesionarios y operadores del servicio público de televisión en caso de violación de las disposiciones legales y reglamentarias, las consistentes en multa, suspensión del servicio y caducidad de la concesión.

En efecto, el artículo 12 literal h) de la Ley 182 de 1995, establece que son funciones de la Junta Nacional de Televisión, entre otras:

*"(...)*

*Sancionar, de conformidad con las normas del debido proceso y con el procedimiento previsto en la ley, a los operadores del servicio, a los concesionarios de espacios de televisión y a los contratistas de los canales regionales por violación de sus obligaciones contractuales, o por*

*transgresión de las disposiciones legales y reglamentarias o de las de la Comisión, relacionadas con el servicio.*

*Para tales efectos, y en relación con las concesiones originadas en un contrato, la Junta Directiva de la Comisión decretará las multas pertinentes por las violaciones mencionadas, en aquellos casos en que considere fundadamente que las mismas no merecen la declaratoria de caducidad del contrato. Ambas facultades se considerarán pactadas así no estén expresamente consignadas en el convenio.*

*Las multas serán proporcionales al incumplimiento del concesionario y al valor actualizado del contrato, y se impondrán mediante resolución motivada.*

*Igualmente, la Junta Directiva podrá imponer la sanción de suspensión de la concesión hasta por seis (6) meses o la cancelación definitiva cuando la transgresión de las disposiciones legales y reglamentarias de la Comisión así lo acrediten.*

*En el caso de las comunidades organizadas, además de dicha suspensión, la Junta Directiva podrá imponer las sanciones de multa hasta por quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la de revocatoria de la licencia para operar el servicio.*

*En el caso de los operadores públicos las sanciones podrán ser multas de hasta mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la destitución de los servidores públicos que hayan tolerado o cometido la infracción.*

*Para el ejercicio de tal facultad la Junta Directiva deberá tener en cuenta la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión;*

*(...)”.*

En virtud de lo antes expuesto, la Junta Nacional de Televisión de la ANTV, en ejercicio de las facultades de Inspección, Vigilancia, Control y Seguimiento señaladas en el acápite de la competencia de este acto, tomará en cuenta los criterios señalados en el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995 antes transcrito, esto es, *"La gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia"*, para efectos de establecer la sanción que debe aplicar en el presente caso, en la medida que encontró que las conductas desplegadas por el concesionario **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2 constituyen un incumplimiento frente a las disposiciones normativas establecidas de acuerdo a lo argumentado en la presente Resolución.

Así mismo, la ANTV en aras de brindar un escenario procesal absolutamente garantista, en la determinación de la sanción a imponer a la sociedad investigada, además de los criterios contemplados en el artículo 12, literal h) ya citado de la Ley 182 de 1995, dará aplicación al principio de proporcionalidad y razonabilidad que orienta las actuaciones administrativas sancionatorias, logrando el equilibrio entre la finalidad de las disposiciones que establecen la sanción y la sanción como tal, y la proporcionalidad entre la conducta generadora de la infracción y la sanción impuesta.

Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia C-125 de 2003, señala lo siguiente:

*"En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, este exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción administrativa la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad. (...)"*

Después de las anteriores precisiones, se tratarán en su orden los criterios señalados en el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995.

#### **Gravedad de la Falta:**

**FRENTE AL PRIMER CARGO:** La Autoridad Nacional de Televisión encuentra que el concesionario **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, conforme lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo 010 de 2006 en concordancia con el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, estaba obligado a atender los requerimientos de información que le formulara la ANTV en ejercicio de su función de Inspección, Vigilancia y Control atribución que esta Entidad estaba cumpliendo precisamente al realizar la visita administrativa el diecinueve (19) de agosto de 2015, sin embargo, la sociedad en mención no atendió la totalidad de los requerimientos de información y documentación que le fueron formulados en el marco de la visita realizada, con lo cual se vio obstaculizado el ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia, Seguimiento y Control de la Autoridad Nacional de Televisión, pues dicha omisión impide obtener una información veraz y oportuna del cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias adquiridas por el concesionario.

De esta manera, el no atender la totalidad de los requerimientos de información que le fueron formulados en el marco de la visita señalada, se considera una conducta grave, porque impactó de forma directa la función de Inspección, vigilancia y control que se encuentra en cabeza de la ANTV.

En lo que respecta a la obligación legal y reglamentaria de la sociedad investigada de atender los requerimientos de información y documentación en curso de visitas de inspección, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; se demostró a lo largo de la actuación el incumplimiento de la obligación en comento, prueba de ello es lo afirmado en el acta de visita No. 15106 del diecinueve (19) de agosto de 2015, así como la aceptación expresa por parte de la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, de no haber entregado la documentación solicitada, sin perjuicio de las explicaciones rendidas por el operador, que no fueron de recibo por esta Autoridad.

**FRENTE AL SEGUNDO CARGO:** La Autoridad Nacional de Televisión encuentra que el concesionario **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, conforme lo establecido en el artículo 12 del acuerdo 10 de 2006 en concordancia con el literal b) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, los concesionarios de televisión por suscripción, deberán emitir un canal de producción nacional con un mínimo de cinco (5) horas diarias de emisión, así mismo en concordancia con lo anterior el artículo 4 del Acuerdo 001 de



2009 de la CNTV "Por medio del cual se incentiva la producción nacional de televisión en canales satelitales temáticos de origen colombiano para su teledifusión a través de los sistemas de televisión cerrada del país", concede la excepción que si en la parrilla de programación del operador de televisión por suscripción cuenta con diez (10) canales codificados temáticos satelitales de origen nacional, quedarán exonerados de la obligación de emitir el canal de producción nacional, la ANTV en ejercicio de su función de Inspección, Vigilancia y Control atribución que esta Entidad estaba cumpliendo precisamente al realizar la visita administrativa el diecinueve (19) de agosto de 2015, sin embargo, la sociedad en mención no evidencio que estuviera cumpliendo con su obligación en el marco de la visita realizada, con lo cual se vio obstaculizado el ejercicio de la función de Inspección, Vigilancia, Seguimiento y Control de la Autoridad Nacional de Televisión, pues dicha omisión impide obtener una información veraz y oportuna del cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias adquiridas por el concesionario.

En lo que respecta a la obligación legal y reglamentaria de la sociedad investigada no cuenta con un canal de producción nacional, ni diez (10) canales codificados temáticos satelitales de origen nacional de conformidad con lo evidenciado en el curso de la visita de inspección; se demostró a lo largo de la actuación el incumplimiento de la obligación en comento, prueba de ello es lo afirmado en el acta de visita No. 15106 del diecinueve (19) de agosto de 2015, así como la aceptación expresa por parte de la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, sin perjuicio de las explicaciones rendidas por el operador, que no fueron de recibo por está Autoridad.

#### **Daño Producido:**

La inobservancia de las disposiciones citadas en el acápite de normas infringidas denota la incuestionable gravedad de las faltas cometidas por parte del operador investigado, lo que sin lugar a duda razonable constituye una antijuridicidad en las conductas desplegadas por la comunidad organizada de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, por lo que el daño producido con los incumplimientos del operador, a criterio de esta Autoridad es consustancial a la antijuridicidad de las conductas tipificadas, es decir, que se encuentra implícita en el mismo verbo rector de las obligaciones y prohibiciones, por las cuales se dio inicio al presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio y se le formuló cargos al operador investigado.

De lo expresado antes se deduce que no se requiere que la Autoridad Administrativa, en este caso la Autoridad Nacional de Televisión ANTV demuestre que la omisión en que incurrió el investigado haya causado un daño a los intereses de la propia administración o de terceros, o defina si el actuar del operador investigado es doloso o culposo, toda vez que las disposiciones legales y reglamentarias que inspiran la prestación del servicio de televisión son de carácter administrativo, y tratándose de un servicio público gozan de un grado superior, por la importancia y protección especial de que gozan por parte del Estado y del ordenamiento, que ha desplegado su potestad de intervención en la prestación de este servicio por su naturaleza.

En ese orden, es importante mencionar que la prestación del servicio de televisión debe estar orientada al cumplimiento de los fines y principios establecidos por el legislador en el artículo 2 de la Ley 182 de 1995, y por supuesto al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el servicio



público de televisión, es decir, que en el caso puntual el daño recae en el bien jurídico tutelado que es la debida prestación del servicio público de televisión que se ha visto afectado, sin que se evidencie que el operador haya actuado con la prudencia, diligencia y el cuidado requerido, porque el operador incumplió varias de las obligaciones y prohibiciones que tiene a su cargo, lo que ha configurado un número considerable de faltas, sin que haya demostrado un eximente de responsabilidad frente a las conductas endilgadas.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero HUGO FERNANDO BASTIDAS, el 29 de mayo de 2014, dentro del expediente con radicación No. 25000-23-27-000-2009-00231-01 (18761). "(...) *No se requiere que la autoridad tributaria demuestre que la omisión o la acción del obligado, según el caso, haya causado efectivamente un daño a los intereses de la propia administración o de terceros, puesto que el tipo de faltas administrativas previstas en los artículos 651 y 675 de E.T. presuponen el riesgo real o potencial de que la omisión o la comisión del error cause un daño, en general, a los intereses públicos. (...)*

*Le corresponde al sujeto pasivo de la obligación demostrar una eximente de imputabilidad de la falta, como la fuerza mayor o caso fortuito tal como lo precisa la Corte Constitucional<sup>14</sup> en sentencia C-690 de 1996. (...)*

*14 "Finalmente, en general es razonable suponer que ha actuado de manera dolosa o negligente quien ha incumplido un deber tributario tan claro como es la presentación de la declaración tributaria en debida forma, por lo cual resulta natural considerar que la prueba del hecho del hecho- esto de la no presentación de la declaración- es un indicio muy grave de la culpabilidad de la persona. Por consiguiente, teniendo en cuenta que las sanciones impuestas en caso de no presentación de la declaración tributaria son de orden monetario, que el cumplimiento de este deber es esencial para que el Estado pueda cumplir sus fines, y conforme al principio de eficiencia, la Corte considera que una vez probado por la administración que la persona fácticamente no ha presentado su declaración fiscal, entonces es admisible que la ley presuma que la actuación ha sido culpable, esto es, dolosa o negligente.*

*(...)"*

#### **Reincidencia:**

En relación con las conductas investigadas y las normas que vulneradas con el actuar de la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, encuentra la ANTV que existe reincidencia por parte de la sociedad investigada toda vez que dentro del proceso A-583 y mediante la Resolución No. 0517 del 30 de marzo de 2016 de, se declaró responsable a la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2 por el incumplimiento del artículo 39 del Acuerdo 10 de 2006, en concordancia con el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, resolviendo lo siguiente :

*(...)*

**"DECLARAR** responsable a la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISION SAS**, identificada con NIT 900.552.508-2, conforme lo establecido en la parte motiva de la presente resolución, por el incumplimiento del artículo 39 del Acuerdo 010 de 2006 en concordancia con el literal b) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, por el no cumplimiento de lo solicitado en el artículo segundo de la Resolución No.1776 del tres (3) de junio de 2014.

**ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER** sanción a la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISION SAS**, identificada con NIT 900.552.508-2, consistente en multa correspondiente a la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/ CTE (\$3.427.937)** conforme lo establecido en la parte motiva de la presente resolución.

(...)

Sanción que fue confirmada mediante la Resolución No. 0108 del 8 de febrero de 2017, situación que será apreciada por la ANTV al momento de dosificar la sanción imponible.

**Proporcionalidad entre la falta y la sanción:**

Conforme lo previsto en el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995, se dará aplicación al principio de proporcionalidad que orienta las actuaciones administrativas sancionatorias. Sobre la particular señala la Corte Constitucional en Sentencia C-125 de 2003, lo siguiente:

"(...)

*En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, este exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción administrativa la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad.*

(...)"

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la finalidad de las normas de orden sancionatorio, las cuales buscan que los concesionarios de los servicios de televisión no incurran en infracciones al régimen que regula el servicio público de televisión, considera la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, previo un juicio de proporcionalidad y razonabilidad entre las infracciones cometidas y las sanciones procedentes de que trata el literal h) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995, que la sanción a imponer a la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, es la consistente en multa, cuyo monto será definido de acuerdo con el valor actualizado del contrato a la presente fecha.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que la Coordinación Administrativa y Financiera de la ANTV determinó e informó a través del Memorando Interno No. I201900001071 del cinco (05) de abril de 2018 que el valor actualizado al 30 de mayo de 2018 del contrato de concesión celebrado entre la ANTV y el operador **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT:

900.552.508-2 es la suma de **CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$104.936.745)**, la Junta Nacional de la ANTV, ha decidido imponer a la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, una sanción correspondiente a la suma de **TRECE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CERO NOVENTA Y DOS PESOS (\$13.117.092)**.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Resolución ANTV 1175 de 2013, las decisiones que se tomen por parte de la Junta Nacional de Televisión se darán en la forma de resoluciones, las cuales serán expedidas por la Dirección.

En mérito de lo expuesto, y conforme a lo aprobado por la Junta Nacional de Televisión según consta en el acta No. 306 del tres (03) de julio de 2018.

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR** responsable a la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, por la violación de lo dispuesto en los artículos 12 y 39 del Acuerdo No. 010 de 2006 en concordancia con lo contemplado en el literal b) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995, el artículo 11 de la Ley 1507 de 2012, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER SANCIÓN** a la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, consistente en multa correspondiente a la suma de **TRECE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CERO NOVENTA Y DOS PESOS (\$13.117.092)**., conforme lo establecido en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR** personalmente el contenido de la presente resolución al representante legal de la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, o a quien haga sus veces en la última dirección registrada en el certificado de existencia y representación legal, haciendo entrega de una copia de la misma y advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición que podrá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo. Si no se pudiese efectuar la notificación personal ésta se surtirá por aviso.

**ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR** a la Coordinación Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Televisión el contenido de este acto administrativo, para efectos del cobro efectivo del valor de la sanción de **TRECE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CERO NOVENTA Y DOS PESOS (\$13.117.092)**, impuesta por la entidad a la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, cifra que deberá ser actualizada a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO QUINTO:** Una vez en firme la presente resolución, los valores de la sanción impuesta y el valor de la diferencia deberán ser consignados en efectivo o cheque de gerencia. Para proceder con el pago, la sociedad **DIGIMEDIOS TELEVISIÓN S.A.S** identificada con NIT: 900.552.508-2, deberá consignar en la cuenta de ahorros Convenio número 44704 de

BANCOLOMBIA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEXTO:** Una vez en firme la presente resolución, informar a la Coordinación Legal, sobre la decisión adoptada en la presente resolución, para lo de su competencia.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** La presente resolución rige a partir de su fecha de ejecutoria.

Dada en Bogotá, D.C., a los

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**ÁNGELA MARIA MORA SOTO**

Directora

17 JUL 2018

Revisó: Carolina Figueredo Carrillo

Revisó: Monica Bolaños

Andrés Pérez

Revisó: María Carolina Olano

Proyectó: Mayra Martínez

MOOR.